

## Se intensifica la lucha por la justicia de los defensores en toda América Latina

**Por: Juliana Câmara. 21/11/2021**

Si nos tomamos en serio los derechos humanos, no debemos dejar de exigir justicia para Berta Cáceres y Marielle Franco

Los últimos meses han sido vitales en la lucha contra quienes atentan contra los defensores de los derechos humanos en Latinoamérica. En Honduras, David Castillo, presidente de una empresa de represas hidroeléctricas y ex funcionario de inteligencia del ejército hondureño, fue declarado culpable de ser coautor del [asesinato de la ambientalista indígena Berta Cáceres](#) hace más de cinco años.

Pero, en Brasil, hubo nuevos reveses en la investigación del [asesinato de la concejala negra de Río de Janeiro Marielle Franco](#). Los recientes cambios en la dirección del caso demuestran que sigue atascado, tres años y medio después del asesinato de Franco y de su chófer, Anderson Gomes.

Ambos casos son un duro recordatorio de la amenaza a la que se enfrentan los defensores de los derechos en la región y de los frágiles mecanismos de protección de los que disponen. Los activistas siguen siendo objeto de ataques –[un reciente informe de Global Witness](#) afirmaba que en América Latina se produjeron tres cuartas partes de los asesinatos de defensores del medio ambiente en 2020- y la justicia y la rendición de cuentas están muy retrasadas.

Dicho esto, la condena de Castillo en Honduras fue una [victoria sin precedentes](#). Demostró que es posible castigar a quienes intimidan a los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos en Honduras. El 3 de agosto, la fiscalía pidió una condena máxima para Castillo de 25 años.

Pero ha sido un largo camino para llegar a su condena. En diciembre de 2019, siete hombres fueron condenados a entre 30 y 50 años de prisión por el asesinato de Cáceres. No fue hasta julio de 2020 cuando se identificó a Castillo como uno de los que habían coordinado y planificado su asesinato.

Castillo había sido presidente de Desarrollos Energéticos (DESA), la empresa responsable de la construcción de la propuesta de presa hidroeléctrica de Agua Zarca en el río Gualcarque, en el oeste de Honduras, que abarca territorio indígena lenca. La comunidad no fue consultada sobre la construcción. Cáceres, líder lenca y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), lideró la campaña para detener la construcción de la presa.

Cáceres fue amenazada, acosada y convertida en objetivo de campañas de desprestigio. Recibió protección del Estado. Y, sin embargo, murió de múltiples heridas de bala mientras dormía en su casa en la ciudad suroccidental de La Esperanza el 2 de marzo de 2016. La investigación posterior sobre su muerte reveló la implicación de miembros de las fuerzas de seguridad, tanto retirados como en activo. Poco después de la muerte de Cáceres, las autoridades hondureñas se apresuraron a insinuar que podría haber sido un crimen pasional. Pero su familia y su comunidad lucharon por la verdad y por la rendición de cuentas.

FWH8KB.jpg

Image not found or type unknown

Berta Cáceres | Mark Kerrison/Alamy Stock Photo

Después de que el gobierno ignorara las peticiones de una investigación internacional independiente, la familia de Cáceres y el COPINH pidieron a expertos jurídicos de Estados Unidos, Guatemala y Colombia que iniciaran una investigación. El Grupo Asesor Internacional de Expertos (GAIPE) encontró pruebas de una conspiración en la que estaba implicada la alta dirección de DAESH.

Además, en 2019, los datos extraídos por el Ministerio Público de Honduras de los teléfonos de los condenados revelaron una cadena de WhatsApp, SMS y registros de llamadas que implicaban a los altos dirigentes de DAESH, entre ellos miembros de la familia Atala Zablah. Los Atala Zablah controlan DAESH y son una de las familias más ricas del país. En uno de los grupos de chat, ejecutivos y miembros de la junta directiva de la empresa expresaron su preocupación por las actividades de los activistas y el odio contra el pueblo indígena lenca. También se coordinaron para activar su red en los medios de comunicación, las fuerzas de seguridad y la esfera política para proteger los intereses de DESA.

El COPINH y la familia de Cáceres afirman que los miembros de la familia Atala Zablah también deben rendir cuentas. Durante el juicio de Castillo, Daniel Atala Midence, que forma parte del clan y es el director financiero de DESA, fue eximido de tener que testificar ya que estaba siendo investigado en relación con el asesinato de Cáceres. Atala Midence nunca ha sido detenido, y ningún miembro del clan ha sido acusado. DESA y los Atala Zablah siempre han negado cualquier implicación en el asesinato de Cáceres.

La [Causa Berta Cáceres](#), que impulsa 13 casos judiciales distintos en torno al asesinato de Cáceres, continúa la lucha por la justicia. Uno de los casos investiga la corrupción relacionada con los contratos del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. El COPINH y la comunidad indígena de Río Blanco [ganaron recientemente el derecho](#) a ser reconocidos como víctimas de los casos de corrupción y a participar en los procesos legales que les afectan.

La Causa Berta Cáceres también busca la revocación del permiso para el proyecto hidroeléctrico. Quiere que el Estado rinda cuentas por no haber protegido a Cáceres y que se investigue la inversión en iniciativas basadas en tales violaciones masivas de los derechos humanos.

### **La lucha de la familia Cáceres inspira la de los que luchan por Marielle Franco**

Mientras tanto, a más de 6.000 kilómetros de la capital hondureña, Tegucigalpa, se libra otra lucha por la justicia. En Río de Janeiro, la investigación sobre el asesinato de Marielle Franco y Anderson Gomes está en marcha, en secreto. Las autoridades argumentan que esto es necesario para proteger la investigación, pero plantea dudas sobre la transparencia. El 10 de julio, los fiscales Simone Sibilio y Letícia Emile anunciaron su retirada de la investigación. Citaron interferencias externas, pero no ofrecieron detalles. El director de la investigación Franco-Gomes ya ha sido sustituido en cuatro ocasiones.

Según los informes, Sibilio y Emile descubrieron que se había filtrado información sensible, y no estaban de acuerdo con las negociaciones del caso.

Durante los tres años y medio transcurridos desde los asesinatos, muchos políticos de Río de Janeiro han sido acusados de ordenar el golpe. Sin embargo, la pregunta sigue siendo: ¿quién ordenó el asesinato de Marielle Franco?

## **Luchar por los derechos humanos es un derecho humano, y es responsabilidad del Estado proteger a los activistas**

En 2019, Ronnie Lessa y Élcio Queiroz, dos ex funcionarios de la policía militar de Río, fueron detenidos por los asesinatos de Franco y Gomes. Ambos hombres han sido acusados y actualmente están a la espera de juicio. Permanecen en la cárcel y niegan las acusaciones en su contra.

La hermana de Franco, Anielle, directora y cofundadora del [Instituto Marielle Franco](#), dice que el caso de Cáceres en la cercana Honduras sigue siendo una inspiración en la lucha por la justicia. El Instituto fue fundado por Anielle, junto con sus padres, Antonio y Marinete, y la hija de Marielle, Luyara, para exigir justicia para Franco y apoyar un cambio político más amplio. En noviembre de 2020, [Mónica Benicio](#), viuda de Franco, fue elegida para el consejo de Río con la promesa de defender los derechos de las mujeres y del colectivo LGBTQIA+, así como la inclusión social. “Marielle es el fruto y la semilla de los que luchan y ven la posibilidad de un mundo diferente en el horizonte. Sueño con que su legado se entienda así”, [dice Benicio](#).

Cáceres y Franco eran defensores de los derechos humanos en [una de las regiones más peligrosas del mundo](#) para estas actividades. Luchar por los derechos humanos es un derecho humano, y es responsabilidad del Estado proteger a los activistas. En 2020, [Honduras era el tercer país más mortífero para los defensores de los derechos humanos, y Brasil el sexto](#). Y Honduras tenía la segunda tasa de asesinatos per cápita de defensores del medio ambiente más alta del mundo. Al menos [21 mujeres activistas de la tierra y el territorio han sido asesinadas](#) en la región de Mesoamérica desde la muerte de Cáceres, según un informe de Iniciativa Mesoamericana. Ocho de ellos se produjeron en Honduras.

En Brasil, el espacio para los defensores de los derechos humanos se ha ido reduciendo. El Comité Brasileño de Defensores de los Derechos Humanos [ha observado](#) repetidas interrupciones entre 2018 y 2020 del programa nacional de protección de los defensores en riesgo. El contexto político conservador, especialmente tras la elección de Jair Bolsonaro en octubre de 2018, se considera

un factor fundamental.

## Una nueva generación de activistas se pone en pie

Son tiempos difíciles, con múltiples emergencias en desarrollo, que afectan a muchos de los grupos representados y defendidos por Franco y Cáceres. La pandemia del COVID-19 tiene graves implicaciones para las comunidades vulnerables de América Latina, como las mujeres, las niñas, los LGBTQIA+, los negros, los indígenas y *los quilombolas* (antiguos esclavos brasileños). El racismo estructural continua [violentando y matando](#) cuerpos negros e indígenas.

La crisis climática ya está afectando a los sistemas alimentarios y a los regímenes de lluvias, provocando fenómenos meteorológicos extremos, muertes y la destrucción de medios de vida, viviendas e infraestructuras. Como defensores de primera línea de los recursos naturales de su zona, los indígenas desempeñan un papel fundamental.

[Como mujeres](#), tanto Cáceres como Franco se enfrentaron a retos específicos, moldeados por quiénes son y con quiénes se identifican, así como por su trabajo para desafiar las estructuras de poder.

Se atrevieron a desafiar la cosificación de sus cuerpos, así como de su zona. Al hacerlo, se situaron en primera línea de la lucha contra los sistemas que sostienen la codicia capitalista y el control colonialista. Como mujer lenca y mujer negra bisexual nacida y criada en una *favela*, Cáceres y Franco, respectivamente, personificaron el desafío a la hegemonía blanca, a las estructuras de clase y a los roles familiares y de género tradicionales.

Ambos lograron el reconocimiento por su trabajo. En 2015, [Cáceres ganó el Premio Ambiental Goldman](#) por su defensa del río Gualcarque. En 2016, Franco obtuvo uno de los mayores porcentajes de votos de todos los candidatos que se presentaron a la legislatura del estado de Río de Janeiro.

Dadas las circunstancias, es evidente que tanto Honduras como Brasil están enviando un mensaje peligroso -y demasiado claro- al permitir que los autores de la muerte de Cáceres y Franco queden impunes. Ambos países están diciendo al mundo que se tolera la violencia contra los defensores de los derechos humanos.

Esto es así a pesar de que toda [una nueva generación de activistas](#) se ha inspirado en Cáceres y Franco. Las jóvenes feministas, que ven el mundo a través de una lente interseccional, se están organizando, identificando sistemas de opresión compuestos que subyugan a las personas, las comunidades y los recursos naturales. Para hacer frente a estos problemas, las activistas siguen centrándose en las causas profundas y en la necesidad de desafiar las estructuras de poder arraigadas. Su trabajo abarca desde la defensa de los derechos de los migrantes, la autonomía del cuerpo, el derecho a la tierra y la salud y los derechos sexuales y reproductivos hasta la lucha contra la homo-, trans- y bifobia, el feminicidio, la violencia estatal, la pobreza, el hambre y el desempleo. Plural, diverso y creativo, su activismo no puede ser compartimentado. Se inspiran en los valores encarnados por Cáceres y Franco, cuyo legado trasciende las fronteras geográficas.

Si nos tomamos en serio los derechos humanos en América Latina, hay que apoyar a esta nueva generación de activistas. Los donantes internacionales deben proporcionar recursos financieros y no financieros flexibles y sostenibles para que la lucha continúe. Hay que respetar la autonomía, la agencia y la experiencia de los activistas. No queremos más mártires. Los activistas deben poder estar seguros y continuar con su trabajo.

En su [discurso de aceptación](#) del Premio Medioambiental Goldman, Cáceres dijo: “Nuestra Madre Tierra -militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente los derechos básicos- nos exige que actuemos”. Y añadió: “Construyamos sociedades capaces de convivir de forma digna, justa y protectora de la vida”. Y pocos días antes de ser asesinada, Franco tuiteó, en referencia a la violencia policial contra los jóvenes negros en *las favelas* de Río de Janeiro: “¿Cuántos más tendrán que morir para que esta guerra llegue a su fin?”.

Les debemos una respuesta.

[LEER EL ARTICULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ](#)

Fotografía: Open democracy

**Fecha de creación**

2021/11/21